

Iquique, trece de mayo de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos autos **RUC 21-4-0349401-9, RIT 0-38-2021, Rol Corte 33-2022 (L)**, el Juzgado del Trabajo de Pozo Almonte, dictó sentencia el quince de marzo pasado, ocasión en que rechazó la demanda interpuesta por el abogado Juan Salas Santander, en representación del **SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO DEL ESTAMENTO SUPERVISORES DE EMPRESA COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CERRO COLORADO**, contra la **COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CERRO COLORADO**, por cobro de prestaciones laborales, con costas.

Contra dicha sentencia, el mismo letrado entabló recurso de nulidad, alegando la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.

A la audiencia de rigor, concurrió por el recurrente el abogado Sr. Alonso Mondaca Avendaño, mientras que por la recurrida lo hizo el abogado Sr. Raúl Fernández Toledo.

OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso deducido se funda, en primer lugar, en la causal establecida en la primera parte del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, y en subsidio, en la causal contemplada en la segunda parte de la misma norma legal, a saber, cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con



infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

SEGUNDO: Refiere el recurrente que el 10 de agosto de 2021 entabló demanda de cobro de prestaciones en contra de su empleador Compañía Minera Cerro Colorado, con el objeto que ésta pagara horas extraordinarias a los trabajadores afiliados al sindicato, por haber tenido que ocupar su tiempo de descanso para la realización de exámenes PCR, producto de la pandemia de COVID-19.

Agrega que el 22 de septiembre de 2021 se celebró audiencia preparatoria, donde se fijaron los siguientes hechos a probar: 1) *Efectividad de adeudarse a los trabajadores por quienes se acciona el pago de horas extraordinarias por el tiempo requerido para la toma de muestra de exámenes de PCR y Antígenos para detección de COVID 19 en su periodo de descanso. En su caso, días y número de horas extraordinarias en que prestaron servicios para el demandado, el monto de las mismas y base de cálculo;* 2) *En la negativa, efectividad de deber compensarse respecto de cada uno de los trabajadores por quienes se acciona una remuneración equivalente a \$ 1.088.864 o la suma que se determine conforme el mérito del proceso por concepto de remuneración ordinaria adeudada por tiempo laborado para la realización de examen de PCR y/o de antígenos en periodo de descanso de éstos. Base de cálculo;* 3) *Procedencia de las excepciones deducidas. Hechos y circunstancias.*



Sobre esa base ofreció la prueba documental, testimonial, absolucón de posiciones, oficios, exhibición de documentos, peritaje contable y otros medios de prueba que describe.

Añade que posteriormente, se celebraron sucesivas audiencias de juicio para la incorporación de la abundante evidencia allegada por ambas partes, a saber, 9 de noviembre de 2021, 26 de noviembre de 2021, 17 de diciembre de 2021, 18 de febrero de 2022, 22 de febrero de 2022 y 25 de febrero de 2022.

Explica que en la audiencia de 18 de febrero de 2022, el tribunal dio a conocer a las partes un escrito presentado el día anterior por el perito contador auditor, quien solicitó más plazo para evacuar el encargo, petición que respaldó y que el demandado no rebatió, dejándolo a criterio del Tribunal, el que finalmente la rechazó sobre la base que la primera audiencia de juicio databa del 9 de noviembre de 2021, tiempo estimó más que suficiente para el cumplimiento de su labor.

Añade que interpuso recurso de reposición, con apelación subsidiaria, los que fueron rechazados.

Posteriormente en la audiencia de 22 de febrero de 2022, se percató que no habían arribado al Tribunal los oficios solicitados a Empresa de Servicio Externos Asociación Chilena de Seguridad y BHP Chile, por lo que al amparo del artículo 454 N° 7 del Código del Trabajo, solicitó se fijara una nueva audiencia para su recepción y que se oficiara en carácter urgente a ambas empresas para que cumplieran con aportar la información requerida. La parte demandada



se allanó y el Tribunal accedió a lo solicitado, apercibiendo a ambas empresas con la aplicación de una multa.

En la audiencia de 25 de febrero de 2022, el tribunal informó que sólo había llegado el oficio de BHP Chile, más no el de Empresa de Servicio Externos Asociación Chilena de Seguridad, por lo que, al igual que el 22 de febrero pasado, solicitó una nueva audiencia para la rendición de la prueba faltante, y que además, se hiciera efectivo el apercibimiento de multa. La demandada se opuso a todo lo solicitado y pidió que se celebrara la audiencia de juicio. El tribunal acogió parcialmente su petición y resolvió imponer una multa de una unidad tributaria mensual a Empresa de Servicio Externos Asociación Chilena de Seguridad, pero rechazó acceder a la suspensión de la audiencia de juicio, en atención a sus reiteradas reprogramaciones.

Frente a dicha resolución entabló recurso de reposición, con apelación subsidiaria, los que fueron desestimados.

Agrega que al final de esa audiencia, el Tribunal acotó excesivamente el tiempo para las observaciones a la prueba, por lo que de nuevo entabló un recurso de reposición, que también fue desechado.

TERCERO: Que en relación con la **causal principal**, expone dos infracciones.

Respecto de la **primera**, sostiene que en la audiencia preparatoria, celebrada el 22 de septiembre de 2021, ofreció prueba pericial contable y solicitó la designación de un perito contador auditor, de los existentes en la nómina de la Corte de Apelaciones de esta



ciudad, para que realizara el cálculo de los conceptos demandados por horas extraordinarias, o en su defecto, el monto de remuneración ordinaria correspondiente respecto del periodo comprendido entre mayo del 2020 a junio del 2021, producto del tiempo empleado por los trabajadores demandantes por la realización de exámenes PCR y de antígenos en periodo de descanso, a lo que el Tribunal accedió nombrando, en primer lugar a don Andrés Javier Vivanco Vergara, y en subsidio a don Mauro Andrés Pizarro Cruz.

Añade que el 28 de septiembre de 2021 el perito Vivanco aceptó el encargo. Al día siguiente el tribunal lo tuvo por notificado, aceptado y juramentado del cargo y fijó como fecha de entrega del peritaje, a lo menos tres días antes de la audiencia de juicio, que debía celebrarse el 9 de noviembre de 2021.

En la audiencia de 18 de febrero de 2022, la Sra. Jueza dio a conocer a las partes un escrito del perito presentado el día anterior, donde éste señaló que por razones de fuerza mayor, vinculadas a problemas médicos personales y de su familia, no pudo concluir el encargo, por lo que pidió ampliación de plazo, proponiendo como fecha de entrega de su informe el 14 de marzo de 2022. Esta solicitud fue rechazada por el Tribunal, manifestando la sentenciadora que no accedería a lo pedido porque se ausentaría seis meses del tribunal, y en consecuencia, no alcanzaría a tomar la prueba.

Expone que dicho argumento constituye una coyuntura personal, que no pudo servir de base a su resolución, máxime si se alegó fuerza mayor, lo que generó una infracción a la garantía del



debido proceso, prevista en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 454 N° 7 del Código del Trabajo, normas que reprodujo.

Asevera que la Magistrada debió llamar a audiencia especial para recibir la prueba pericial, pues dicha pieza era fundamental para acreditar sus pretensiones y para la resolución del asunto, sobre todo si la materia de la pericia estaba contemplada en el punto de prueba N° 1 fijado por el Tribunal, explicando, además, latamente, el concepto de fuerza mayor.

Respecto de la **segunda** infracción, manifiesta que en la señalada audiencia preparatoria de 22 de septiembre de 2021, solicitó un oficio a Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad, para que informara si los trabajadores que indica se realizaron exámenes de PCR y exámenes antígenos en el periodo comprendido entre mayo de 2020 y junio de 2021, en sus sedes, o fuera de faena, indicando fecha y hora de la toma de muestra.

Luego, en la audiencia de 25 de febrero de 2022, esto es, la última audiencia de juicio, constató que éste no había llegado al Tribunal, por lo que pidió nueva fecha de audiencia para su incorporación y que se hiciera efectivo el apercibimiento de multa en su contra, petición que se acogió sólo en cuanto aplicar una multa a la institución requerida, rechazándose fijar nueva fecha de juicio, el que prosiguió hasta su conclusión, cuestión que en su opinión vulnera el debido proceso, por infracción al artículo 454 N° 7 del Código del Trabajo.



Cita jurisprudencia y alega que la actuación del Tribunal lo dejó en la indefensión respecto de un punto de prueba fijado por la propia juzgadora.

Agrega que el Tribunal lo privó de rendir prueba necesaria, lo que provocó la indeterminación que el propio fallo acusa, aseverando que la sentenciadora creó un perjuicio procesal sobre el cual cimentó su decisión.

Concluye que estos vicos procesales influyeron sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues fue privado por la juzgadora de prueba que resultaba fundamental para sus pretensiones.

CUARTO: Que en relación a la causal **subsidiaria**, sostiene que el tribunal infringió el artículo 454 N° 7 del Código del Trabajo, norma que nuevamente reproduce, para insistir en que es imperativo para el Juzgador que cuando un oficio o informe pericial no fuere evacuado en la audiencia de juicio y su contenido fuera relevante para la resolución del asunto, aquél debe tomar las medidas inmediatas y necesarias para su aportación, y si esto no fuera posible, debe fijar una nueva audiencia.

A continuación reitera el contexto en que el Tribunal rechazó su petición de fijar una nueva fecha para la recepción de la prueba pericial (audiencia de 18 de febrero de 2022) y del oficio faltante (audiencia de 25 de febrero de 2022), repitiendo latamente las circunstancias detalladas en los motivos anteriores.

Agrega que el vicio se manifiesta, también, en que en la audiencia de 25 de febrero de 2022, esto es, la última audiencia de



juicio, se le otorgaron sólo cinco minutos para realizar observaciones, cuestión que afecta el debido proceso al no contar con el tiempo suficiente para hacerse cargo de comentar toda la prueba allegada al proceso.

Refiere que los vicios reclamados tuvieron lugar en la dictación de la sentencia, y que de no mediar, los resultados del juicio habrían sido diferentes, toda vez que éstos influyeron en la decisión de rechazar su demanda.

QUINTO: Solicita, en definitiva, que en virtud de la causal principal se declare la existencia del vicio reclamado, se anule la sentencia y se retrotraiga el proceso al estado de llevarse a cabo una nueva audiencia preparatoria, por el Tribunal no inhabilitado que corresponda, o se retrotraiga al estado procesal que esta Corte determine, o bien, en caso de acogerse la causal subsidiaria, se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo, acogiendo en todas sus partes el petitorio original, o lo que esta Corte estime, conforme al mérito del proceso.

SEXTO: Que para la resolución del recurso deducido, debe observarse, en primer lugar, que este medio de impugnación extraordinario persigue invalidar el procedimiento, total o parcialmente, junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según sea el caso, si en su dictación concurre alguna de las causales señaladas en la ley, en relación con determinados vicios capaces de generar nulidad y que tengan influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, que guardan relación directa con la infracción de derechos y garantías



constitucionales o legales, mas no con la determinación de los hechos efectuada por el sentenciador en el fallo recurrido, dado que tal especificación fáctica y su valoración corresponde privativamente al Tribunal que conoce del proceso, cuestión asentada bajo sanción de vulnerar los principios elementales del juicio oral, particularmente aquel relacionado con la inmediación, y que impide que otros juzgadores que no sean aquellos que han intervenido en el juicio, hagan apreciación de las probanzas rendidas durante el mismo.

De este modo, corresponde únicamente a la Corte de Apelaciones respectiva la verificación de ciertos vicios descritos en la ley, que tengan influencia sustancial en lo dispositivo del fallo y cuya trascendencia habilita la anulación del mismo o del procedimiento que le sirve de antecedente.

SÉPTIMO: Delimitado, entonces, el marco del presente recurso y analizados los antecedentes que lo fundan en relación a la sentencia dictada, se resolverá su rechazo, al no configurarse las causales de nulidad invocadas por el recurrente.

OCTAVO: En efecto, en relación a la causal principal, que el recurrente vincula con la primera parte del artículo 477 del Código del Trabajo, deberá observarse, primeramente, que dicha infracción surge cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, norma que nos remite a la observación del debido proceso, contemplado en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que refiere que toda sentencia



de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y que corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

Como es sabido, el texto fundamental no define lo que debe entenderse por debido proceso, no obstante la doctrina y la jurisprudencia lo han definido, en términos generales, como aquél que permite que el proceso judicial se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario, concepto sobre el cual el Tribunal Constitucional ha señalado que aquél debe ser “racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad, y justo, para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes”.

Sobre esa base, como se adelantó, no se divisa que la jueza del grado haya infringido los derechos y garantías procesales del recurrente, en ninguna de las infracciones que acusa, como pasará a detallarse.

NOVENO: Ciertamente, la decisión de no acceder a fijar nueva fecha para la recepción de la prueba pericial contable, en la audiencia de 18 de febrero de 2022, situación que el recurrente denomina *primera infracción*, no vulneró de modo alguno el debido proceso, en la medida en que el peritaje faltante debió ser evacuado tres días antes de la primera audiencia fijada para el desarrollo del juicio, esto es, el 9 de noviembre de 2021, debiendo observarse, además, que la



recurrente jamás instó, en tiempo y forma, por la evacuación de la mencionada prueba.

En efecto, tal como se desprende de los antecedentes de la causa, en la audiencia preparatoria de fecha 22 de septiembre de 2021, el Tribunal accedió a la petición de la demandante para designar un perito contador auditor de la nómina existente en la Corte de Apelaciones de esta ciudad, para que se avocara al cálculo de las horas extraordinarias o monto remuneracional demandado, en las fechas en que los trabajadores debían realizarse los test de PCR y antígeno fuera de faena.

Dicho nombramiento recayó en don Javier Vivanco Vergara, quien aceptó el encargo el 28 de ese mes, profesional al que el Tribunal ordenó entregar su informe a más tardar tres días antes de la audiencia de juicio, programada para el 9 de noviembre de 2021.

Luego, prácticamente tres meses después, el 17 de febrero de 2022, tras tres audiencias de juicio (9 de noviembre de 2021, 26 de noviembre de 2021 y 17 de diciembre de 2021) donde se incorporaron diferentes medios de prueba, comparece el perito por escrito excusándose de su omisión por razones de fuerza mayor, vinculadas a su salud, solicitando una prórroga para hacer entrega del encargo el 14 de marzo de 2022, petición que en definitiva la Sra. Jueza a quo rechazó, debido al tiempo transcurrido desde que debía evacuar su trabajo, todo ello como se dijo, sin que la demandante reparara y requiriera antes su entrega.



En ese contexto, la decisión del Tribunal parece más que razonable, pues el tiempo transcurrido para evacuar la pericia resulta excesivo, y más aún la fecha propuesta para su entrega, debiendo observarse que correspondía a la demandante instar oportunamente por su obtención, lo que no hizo sino hasta casi 90 días después de la fecha en que debía evacuarlo, cuestión que por sí misma aleja lo resuelto de cualquier vulneración al debido proceso, en la medida en que no es aceptable acusar al Tribunal de privar a la parte de un medio de prueba y dejarlo en la indefensión, cuando ha sido ella misma quien no reclamó durante meses su retraso, pudiendo hacerlo.

En este escenario, entonces, no existe verdaderamente una infracción al artículo 454 N°7 del Código del Trabajo, norma que en lo pertinente prescribe, en síntesis, que si un oficio o pericia relevante no se allegare a la causa antes de la audiencia de juicio, el juez deberá fijar una nueva audiencia para el sólo efecto de su recepción, por cuanto dicha disposición supone una actividad previa de la parte en orden a pugnar, en tiempo y forma, por la prueba faltante al juicio, y que no obstante aquello ésta no arriba al Tribunal, dicho en otras palabras, se trata de una herramienta procesal que favorece al interviniente diligente que ha procurado activamente que la prueba se allegue al juicio, y que a pesar de ello, no lo logra, quedando entonces privado de una pieza probatoria que le resulta indispensable para sus pretensiones, escenario que no se condice con la situación del recurrente, quien ninguna actividad desplegó para instar por la prueba que ahora extraña.



Por otra parte, ninguna evidencia acompañó el perito para acreditar los problemas personales o familiares de salud a que aludió para justificar su retraso, de modo que no resulta posible determinar la procedencia de la fuerza mayor que alega.

Finalmente, la circunstancia que la sentenciadora haya aludido a su ausencia del Tribunal para no acceder a su petición, no es un elemento que forme parte ni sea fundamento de su resolución, por lo malamente podrá ser oído.

DÉCIMO: Que el razonamiento precedentemente expuesto, resulta plenamente aplicable a lo que el recurrente denomina *segunda infracción*, esto es, la circunstancia de no haber agendado el Tribunal una nueva audiencia, el 25 de febrero de 2022, para la recepción del oficio pendiente de la empresa Servicios Externos de la Asociación Chilena de Seguridad, en la medida en que el actor sólo se limitó a pedir cuenta de aquél en las audiencias de juicio, tras constatar que no había sido recibido por el Tribunal, salvo en una ocasión, en que lo hizo un día antes de la cuarta audiencia fijada para ese efecto (17 de febrero de 2022), resultando meridianamente claro, entonces, que no instó activa y diligentemente durante el procedimiento para asegurar que dicha pieza probatoria estuviera a su disposición con la debida anticipación, a fin de llevar adelante el proceso analizado.

En ese contexto resulta menester relevar, por una parte, que la ocasión en que se rechazó la mencionada petición, esto es, el 25 de febrero de 2022, correspondía a la sexta audiencia de juicio, y por otra parte, que de acuerdo a los folios 169 y 171 de la carpeta virtual de



primera instancia, gran parte de la información solicitada había sido recibida por el Tribunal y agregada a sus antecedentes los días 21 y 22 de febrero de 2022, no debiendo perderse de vista, además, que de acuerdo a lo finalmente informado por la entidad requerida, el mismo 25 de febrero de 2022, los antecedentes complementarios que puntualmente solicitaba el actor, esto es, la hora de la toma de muestra de los exámenes ya informados al Tribunal, no se encontraban en su poder, situación que en definitiva revela que la prueba faltante carecía de la relevancia que el artículo 454 N° 7 del Código del Trabajo exige, como requisito sine qua non, para el agendamiento de una nueva audiencia a fin de proceder a la recepción de un oficio faltante.

Digamos, por último, que no es cierto que la Juzgadora se haya basado en un vicio provocado por ella para rechazar la demanda, pues como se viene diciendo, la circunstancia de no contar con la prueba alegada obedeció a la inacción procesal del propio recurrente, y en caso alguno, a la decisión del Tribunal de no acceder a una nueva prórroga, que a su vez hubiera significado una séptima audiencia de juicio.

UNDÉCIMO: Que en relación a la causal subsidiaria de nulidad, que el actor vincula a la segunda parte del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, sentencia dictada con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, deberá observarse que esta hipótesis de invalidación surge no sólo cuando el sentenciador ha contravenido formalmente el tenor de la norma,



fallando en oposición al texto expreso, sino también, cuando ha hecho una falsa aplicación de su contenido, cuando la ha aplicado a un caso no regulado por ella, cuando ha prescindido de su aplicación en los casos en que corresponde y, finalmente, cuando ha realizado una errónea interpretación de la misma, otorgándole un alcance diverso a aquél que debió concederle, de haber mediado una ajustada aplicación de los artículos 19 a 24 del Código Civil.

En consecuencia, la infracción de ley a que alude la norma, supone un error in iudicando, esto es, de aplicación del derecho sustantivo que resuelve el asunto sometido a la decisión del Tribunal, hipótesis que no resulta concordante al caso de la especie, desde que la norma invocada por el recurrente como infringida para estos efectos, a saber, el artículo 454 N° 7 del Código del Trabajo, tiene un carácter procesal, circunstancia que por sí misma torna en improcedente el presente motivo de invalidación.

Aun así, valga indicar que la sentenciadora aplicó dicha disposición en su correcto sentido y alcance, en la medida en que ésta no establece un imperativo obligatorio para el juez, como sugiere el recurrente, de fijar sucesivas e ilimitadas audiencias para procurar la aportación de una prueba, sino un examen prudencial vinculado a la relevancia y necesidad de la misma en aras de la resolución del asunto, examen que además debe realizarse en coherencia y equilibrio con los principios de celeridad y concentración del procedimiento laboral, contemplados en el artículo 425 del citado texto legal.



Por último, no será oído el recurrente en cuanto alega la circunstancia de no habersele otorgado tiempo suficiente para realizar observaciones a la prueba, desde que aquello no se ajusta de manera alguna a la hipótesis de nulidad analizada, conforme lo razonado precedentemente, como tampoco a la anterior, esto es, como infracción al debido proceso, toda vez que en ningún caso se coartó su derecho a expresarse o realizar las alegaciones que estimara pertinentes en esta parte del juicio, debiendo tenerse presente, por una parte, que de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal, éste incluso se excedió del tiempo concedido al efecto, y por otra parte, que los tiempos que el juzgador otorga para hacer las alegaciones del caso, se enmarcan en la esfera de sus facultades privativas de dirección de la audiencia, las que como se viene diciendo fueron adecuadamente ejercidas.

DUODÉCIMO: Que en consecuencia, no advirtiéndose la concurrencia de los vicios invocados, el presente recurso de nulidad será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el abogado don Juan Salas Santander, en representación convencional del **SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO DEL ESTAMENTO SUPERVISORES DE EMPRESA COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CERRO COLORADO**, contra la sentencia de quince de



marzo pasado, dictada por el Juzgado del Trabajo de Pozo Almonte, y en consecuencia, se declara que dicha sentencia no es nula.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción del Ministro sr. Andrés Provoste Valenzuela

Rol N° 33-2022 Laboral-Cobranza.

BSXGZKQWFD

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros sr. Andrés Provoste Valenzuela, sra. Mónica Olivares Ojeda, sr. Pedro Güiza Gutiérrez y sra. Marilyn Fredes Araya. No firma la Ministro sra. Fredes Araya, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente en comisión de servicios. Iquique, trece de mayo de dos mil veintidós.

En Iquique, a trece de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>